

El negocio de la inmigración.

Cómo la mano de obra barata se ha convertido en el mayor subsidio al capital.

1. La paradoja de la inmigración, un fenómeno mal contado.

La inmigración en España no es un fenómeno natural ni una invasión, es la respuesta a la demanda de mano de obra barata por parte del sistema productivo, necesitado de trabajadores dispuestos a aceptar las condiciones laborales y salariales que los trabajadores locales rechazan.

Los datos son reveladores: el 42,9% del empleo creado desde la reforma laboral ha sido ocupado por trabajadores inmigrantes. La Seguridad Social supera los 3,2 millones de afiliados extranjeros, el 14,4% del total de cotizantes.

El 90% del empleo nuevo creado entre enero de 2024 y marzo de 2025 fue cubierto por inmigrantes. Sin ellos, sectores enteros de la economía española se paralizarían.

2. La segmentación del mercado laboral.

Los trabajadores extranjeros se concentran en los sectores peor remunerados y más precarios. En la Hostelería el 29,1%, en la Agricultura el 26,9%, en la Construcción el 24,3%, en el Sistema Especial del Hogar el 42,3% y en el Agrario el 39,4%. Por no citar otros sectores incómodos, como la prostitución.

La situación no es un accidente, es el resultado de un modelo empresarial arcaico que necesita un estrato laboral precario para mantener los costes bajos. Los españoles ocupan los empleos mejor remunerados, mientras los inmigrantes desempeñan los puestos de menor valor añadido.

El 23% de la población ocupada en España es inmigrante y su presencia en los sectores más duros resulta patente con solo salir a la calle.

3. La brecha salarial como mecanismo de acumulación.

La diferencia salarial no es una consecuencia indeseable, es el elemento central del negocio de algunos empresarios. Los inmigrantes en España ganan un 29% menos que los trabajadores locales (la brecha más abultada entre nueve economías desarrolladas analizadas en *Nature*).

Tres cuartas partes de esa diferencia salarial se debe a la segregación de los trabajadores inmigrantes hacia los empleos peor pagados. Pero incluso si desempeñan el mismo trabajo en la misma empresa, los inmigrantes cobran un 4,6% menos (en España, este porcentaje alcanza el 7%, uno de los más altos).

En otras palabras, los empresarios que contratan mano de obra inmigrante obtienen un beneficio extra al pagar menos por el mismo trabajo. Esa es la esencia del negocio, una transferencia de valor desde los inmigrantes hacia ellos.

4. La semiesclavitud moderna.

La precariedad de los inmigrantes y su situación administrativa irregular los convierte en sujetos vulnerables sin capacidad de negociación. Los casos documentados no son excepciones, son solo la punta del iceberg.

En los últimos cuatro años, la Inspección de Trabajo ha tramitado casi 50.000 infracciones por explotación laboral de inmigrantes. En 2025, impuso 16.341 infracciones, la cifra más alta jamás registrada y un 28% más que el año anterior.

El 36% del trabajo doméstico se realiza de manera informal y una de cada cuatro inmigrantes se halla en situación irregular. En 2025, la Guardia Civil liberó a 80 víctimas inmigrantes que trabajaban en condiciones de semiesclavitud en Castellón y Valencia. La Policía Nacional desarticuló una red que explotaba a más de 300 trabajadores nepalíes.

Estos casos son propios de un sistema que tolera la semiesclavitud como parte de su funcionamiento ordinario.

5. ¿Beneficios privados y costes socializados?

Según lo explicado, el modelo genera beneficios privados (el ahorro en salarios de los empresarios), mientras los costes se socializan: los servicios sanitarios, educativos y sociales a los que los inmigrantes y sus familias recurren son financiados por el conjunto de la sociedad.

Sin embargo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el gasto público por inmigrante es un tercio menor que el de un español, porque usan menos los servicios educativos y sanitarios. Según esta fuente, siempre sospechosa de jugar a favor de las patronales, el gasto imputable a los inmigrantes es proporcionalmente menor a su peso poblacional.

En 2025, las cotizaciones de los trabajadores extranjeros fueron el 14,1% del total, una parte significativa de los ingresos de la Seguridad Social. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, lo reconoció explícitamente: *"La aportación de las personas extranjeras es estructural y decisiva para el crecimiento del empleo, la sostenibilidad del sistema de pensiones y la prosperidad compartida de nuestro país"*.

6. Las cuidadoras invisibles.

Hay un sector donde la presencia de inmigrantes es decisiva y, sin embargo, permanece invisibilizado: el trabajo de cuidados. Las mujeres inmigrantes sostienen la vida de muchas personas mayores dependientes, aunque su contribución apenas se reconoce.

En España trabajan aproximadamente 500.000 personas en el sector del hogar y los cuidados. De ellas, alrededor de 350.000 están afiliadas a la Seguridad Social, mientras que 150.000 permanecen en la economía sumergida, en un limbo legal donde el trabajo no reconocido se convierte en pura supervivencia.

El 95% de estas trabajadoras son mujeres y el 69% de origen extranjero. Según datos de septiembre de 2025, más de 1,33 millones de mujeres extranjeras trabajan en España y una parte significativa lo hace en el

sector del hogar y los cuidados. De las 133.731 mujeres extranjeras afiliadas específicamente como empleadas del hogar, la mitad provienen de cinco países: Rumanía, Honduras, Colombia, Paraguay y Filipinas.

En provincias como Madrid (31,1% de las afiliadas), Barcelona, Alicante y Valencia, su presencia es indispensable para el funcionamiento diario de miles de hogares. Muchas trabajan como internas (aproximadamente 38.000 mujeres según estimaciones de 2025), viviendo en el mismo hogar donde trabajan.

Las consecuencias sobre su salud son alarmantes: el 74% de las trabajadoras del hogar necesita medicarse habitualmente para soportar las condiciones de su trabajo. Son mujeres que cuidan de nuestros mayores mientras su propia vida se consume sin derechos regulados.

7. La connivencia política.

La patronal solicita mano de obra extranjera cuando la necesita y el gobierno la facilita. Los empresarios catalanes han reclamado un pacto para favorecer la inmigración: *"La necesitamos como el aire para respirar"*. La CEOE respalda la regularización de migrantes y considera "lógico" que quienes trabajan tengan derecho a la Seguridad Social.

La regularización extraordinaria aprobada en 2026 beneficiará a entre medio millón y 800.000 personas. Existe un consenso tácito: las élites políticas y económicas se benefician de un flujo migratorio que mantiene los salarios bajos y la economía en marcha.

Hasta el CES (Consejo Económico y Social) ha señalado que la inmigración es un componente estructural de la economía española y de la financiación del bienestar colectivo.

8. Las víctimas del sistema y su doble explotación.

Sin duda, los inmigrantes no son los causantes del problema, sino sus principales víctimas. Son explotados por los empresarios y estigmatizados por una parte de la sociedad que no entiende que su presencia sea

el resultado de una demanda estructural. Su "culpa" es querer trabajar y sobrevivir, huyendo de situaciones y territorios que impiden cualquier posibilidad de una vida digna.

La doble explotación es la cara más cruel del sistema. Los inmigrantes son necesarios para que la economía funcione, pero se les niegan los derechos que merecen. Son la variable de ajuste de un modelo económico que los utiliza y desecha. Como señala el informe del CES, pese a la mejora de sus condiciones de vida, son más vulnerables al riesgo de pobreza.

9. ¿Hacia dónde vamos? El largo plazo de la inmigración.

La situación actual no es un fenómeno coyuntural, sino el síntoma de una tendencia que se prolongará durante décadas.

El envejecimiento de la población es el factor determinante. En 2024, el índice de envejecimiento en España alcanzó el 142%: había 142 personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. En 2050, España perderá 1,8 millones de personas en edad laboral. Para entonces, existirán 2,1 millones más de trabajadores sénior que jóvenes. La tasa de dependencia pasará de 2,6 trabajadores por cada persona mayor de 65 años a solo 1,6.

Sin inmigración, ese colapso sería más rápido. Algunos análisis estiman que España necesitará alrededor de un millón de inmigrantes al año para sostener el empleo y las pensiones. La AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, creada en 2013 para garantizar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad de las cuentas públicas) ha señalado que, incluso con esos flujos, la llegada de inmigrantes no será suficiente para compensar la jubilación de los nacidos entre los años 60 y 70.

La segregación laboral tiene y tendrá efectos a largo plazo. Los inmigrantes se mantienen en sectores de menor productividad, en peores condiciones y con un 11% menos de salario. La productividad por hora trabajada de la población foránea es un 20% inferior a la española, lo que reduce su contribución al crecimiento económico, sus aportaciones a la Seguridad Social y perpetúa su posición subordinada.

La segregación residencial es la otra cara de la misma moneda. De los 2,5 millones de migrantes no europeos que han llegado en los últimos diez años, la mitad vive en los barrios más pobres. Esta concentración espacial refuerza su aislamiento social, limita el acceso a oportunidades, perpetúa la exclusión de generación en generación y alimenta los conflictos étnicos y raciales.

El resultado es un escenario en el que la inmigración es un parche necesario pero insuficiente. Necesario para sostener un sistema en claro declive e insuficiente para afrontar sus contradicciones irresolubles.

10. El negocio de la inmigración como síntoma.

De todo lo señalado, cabe concluir que el problema no es la inmigración, sino un modelo económico que necesita mano de obra barata, socializa sus costes y utiliza a los trabajadores inmigrantes como variables de ajuste de sus propios desequilibrios.

Los datos oficiales señalan que los inmigrantes son más jóvenes, cotizan más de lo que consumen, contribuyen al sostenimiento del sistema de pensiones, cuidan de nuestros mayores y mantienen en pie sectores enteros de la economía. Y, sin embargo, el discurso dominante los presenta como una amenaza y muchos ciudadanos también.

Es la lógica perversa de un sistema que necesita mano de obra barata, a la vez que un chivo expiatorio al que culpar de la precariedad que genera.

El problema no es que vengan inmigrantes, sino que se les espere para explotarlos. El problema no es que no se sepa integrarlos, sino que no interese, porque un inmigrante integrado exige derechos, negocia salarios y deja de ser una variable de ajuste.

El sistema necesita que los inmigrantes sean temporales, precarios y vulnerables. Y por eso los mantiene en esa situación.

La inmigración no es el problema, es la solución que el sistema ha encontrado para no tener que cambiar.